

XXX CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES

VILLAHERMOSA, TABASCO

SEPTIEMBRE 10-13, 2019

¿Y después del tsunami electoral quién es quién en la política mexicana?

Rosa María Mirón Lince¹

VERSIÓN PRELIMINAR. NO CITAR

1. La reconfiguración del poder en la transición

La transición democrática fue un largo proceso de reacomodo institucional y reconfiguración del poder político. La mexicana fue parte de una ola de transformaciones políticas, que se dieron de manera más o menos simultánea, en numerosos países durante las últimas décadas del siglo XX.

A través de la transición democrática se posibilitó el cambio pacífico del régimen político que encabezó la agrupación ganadora de la revolución mexicana, hacia uno de legitimidad legal y democrática.

Ya desde los estudios icónicos de Sartori, González Casanova y Carpizo, entre otros, conocemos algunas de las características del sistema político mexicano donde destacó la concentración de la clase política en el PRI y la concentración del poder político en el Presidente de la República, quien a través de su partido controlaba todos los niveles de gobierno, incluida la organización de elecciones, al tiempo que entorpecía el desarrollo de fuerzas opositoras que les disputaran el poder o formaran controles eficaces.

A pesar de la relativa estabilidad con la que gobernó durante la mayor parte del siglo XX, el régimen de partido hegemónico perdió prestigio y aceptación, por lo menos, por las siguientes razones: las crisis recurrentes, relacionadas con un ineficaz manejo de la

¹ Doctora en Ciencia Política por la UNAM, profesora-investigadora adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Miembro del SNI nivel 2. Red de Politólogas. Actualmente es Coordinadora del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Correo: rmiron2@yahoo.com

economía; el aumento de la pobreza, generador del descrédito de las promesas de justicia social de la revolución mexicana y su partido; la corrupción política, amparada por la impunidad que protegía a los integrantes del régimen; la mala calidad de los servicios públicos y la inseguridad, relacionada con la corrupción política; así como también la creciente diversidad social y política que hizo que cada vez más personas y sectores no se sintieran representados por el grupo gobernante y exigieran nuevos espacios de expresión y representación.

Algunos acontecimientos fueron decisivos para iniciar y, más tarde, acelerar la decadencia del régimen de partido hegemónico: el movimiento estudiantil de 1968, los movimientos radicales que fueron ahogados por la guerra sucia en la década de los 70; así como las movilizaciones ciudadanas de las décadas de 1980 y 1990.

Ante la creciente oposición, el gobierno mexicano comprendió la necesidad de una transformación y permitió que ésta ocurriera, pero en la medida de lo posible trató de controlarla, vigilar sus cauces y, sobre todo, aprovechó su carácter pacífico para evitar la supervivencia de la clase política que gobernó durante la hegemonía priista.

Los cambios en la ley fueron significativos y claros. Las reformas electorales de 1991 a 1996 generaron condiciones de certeza y transparencia en el funcionamiento de las casillas, y el escrutinio de votos, así como la imparcialidad de las autoridades electorales. Las reformas de 2008 a 2014 atendieron las condiciones de la competencia, las campañas, la fiscalización y la aplicación de sanciones a cualquier partido, candidato, persona moral o física que cometa infracciones o delitos electorales.

De manera lenta, pero sostenida, la hegemonía fue cediendo espacios municipales y estatales. A partir de 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados para dar inicio a un escenario de gobierno sin mayoría. En la elección del año 2000 perdió la presidencia del país. Los espacios de gobierno y representación se abrieron; se incorporaron los líderes y representantes de distintos partidos, con lo que las elecciones se tornaron cada vez más competidas.

La alternancia en el poder, que ocurrió el año 2000 con la victoria de Vicente Fox, permitió reemplazar al PRI por el Partido Acción Nacional (PAN), el cual disfrutó solo de un moderado efecto de arrastre, porque el tricolor conservó el control de la mayor parte de

los estados y municipios, además de permanecer como la fuerza predominante en el Congreso.

Durante el sexenio foxista, el PRI fue un interlocutor, cuando no un aliado indispensable para impulsar la agenda presidencial y evitar la parálisis. Quedaba claro que la transición arrebató al poder ejecutivo el control político del país, aunque no aniquiló las redes de poder construidas durante el sistema de partido hegemónico.

Sin embargo, el escenario de gobierno sin mayoría contribuyó a fortalecer los poderes legislativo y judicial; mientras que la creciente competitividad política distribuyó las victorias locales entre las tres principales fuerzas políticas, el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La desaparición de la hegemonía de un partido facilitó también el desarrollo de un incipiente pero genuino federalismo, acompañado del surgimiento y consolidación de élites políticas regionales.

Los avances en la democracia procedimental resultan incuestionables. Entre otros elementos, porque el sistema electoral democrático garantizó el sufragio efectivo, libre y secreto. El sistema de partidos competitivo fue posible gracias a un marco normativo que fomentó una competencia libre y equitativa en donde todos los partidos tuvieron la posibilidad de ganar las elecciones. Los escenarios de alternancia, la presencia opositora en todos los niveles de gobierno y la creación de órganos autónomos generaron controles y contrapesos al poder político, a favor de los intereses de la ciudadanía.

Sin embargo, los avances en la construcción de la democracia electoral y procedimental no se extendieron a otros ámbitos fundamentales de la misma relacionados con el control del poder, ni con las fallas en la clase política. El análisis de los temas pendientes y los aspectos ambientales (tales como corrupción, cultura política y clase gobernante, entre los principales) identifica elementos que dificultan la eficaz puesta en marcha del marco legal para regular las relaciones políticas (Crespo, 2012; Alcocer, 2008).

De igual modo, persistieron arreglos institucionales que no resolvieron las relaciones de poder ajenas a la formalidad de los actos electorales. Tales como las redes clientelares, la presión del capital y el crimen organizado, así como las agrupaciones que defienden privilegios heredados de tiempos del partido hegemónico. De tal manera, las prácticas fraudulentas y la simulación política continuaron vigentes (Ackerman, 2010).

La permanencia de problemas anteriores a la alternancia sembró la duda sobre la eficacia de los mecanismos democráticos para resolver los grandes problemas nacionales. Por si fuera poco, la democracia electoral quedó severamente cuestionada en la primera elección presidencial posterior a la transición.

Los comicios presidenciales de 2006 se resolvieron por medio punto de ventaja a favor del candidato del oficialismo, el panista Felipe Calderón Hinojosa. Quien obtuvo el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador del PRD, no quedó conforme con el resultado y a partir de ahí encabezó un prolongado activismo, donde culpaba a los gobiernos del PAN y el PRI de los problemas que seguían aquejando a la población.

Acusados de beneficiarse económicamente, mientras la pobreza crecía, la violencia se multiplicaba y la economía mostraba un comportamiento sostenido, pero modesto; el PAN y el PRI renovaron su alianza *de facto*.

Los comicios de 2006 fueron desfavorables para el tricolor, que bajó a la tercera posición en las preferencias, perdió la posición de primera minoría que tenía en la Cámara de Diputados y fue derrotado en las cuatro elecciones de gobernador que se realizaron ese año. Ante su frágil victoria, el blanquiazul recurrió a la alianza con el PRI, una vez más, para impulsar la agenda del presidente y contrarrestar la presencia del PRD como un constante y aguerrido opositor al gobierno calderonista.

La segunda administración del PAN en la presidencia vio la recuperación del PRI en los comicios locales, y también en las elecciones intermedias. A lo largo del sexenio calderonista y ante la polarización escenificada por el PAN y el PRD, el PRI se mostró ante la ciudadanía como la oposición moderada que, desde el tercer sitio, supo posicionarse en el Congreso como un aliado imprescindible para panistas y perredistas. Ante un panismo incapaz de gestionar por sí solo la agenda presidencial y un perredismo reacio a colaborar con un presidente al que no reconocía, el PRI jugó la carta de *partido bisagra*, necesario para acordar con el PAN o con el PRD, según fuera necesario, aprobar iniciativas y políticas públicas, o bien asumir una posición de crítica y contrapeso al gobierno.

El PRI se presentó a la elección presidencial de 2012 confiado y animado por las encuestas que le dieron la ventaja desde el inicio de las campañas a su candidato,

Enrique Peña Nieto. Sin embargo, aún cuando conquistó la silla presidencial, los electores no retornaron en tropel al redil tricolor.

Además, la victoria de Peña Nieto fue descalificada nuevamente por el principal candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al PAN y al PRI de ser comparsas en el reparto del poder y la realización de elecciones fraudulentas, que excluían la posibilidad de una victoria electoral para el lopezobradorismo.

El retorno del tricolor al poder no desató la euforia que generó 12 años antes la victoria foxista. En 2012 el PRI obtuvo 157 distritos de mayoría y 50 curules por el principio de representación proporcional, que le reportaron un total de 207 diputados federales. Aprobar la agenda legislativa de Peña, exigía conseguir 44 votos de otras bancadas para alcanzar la mitad más uno, necesaria para la aprobación de leyes ordinarias y 126 legisladores para configurar una mayoría calificada requerida para aprobar reformas constitucionales.

El presidente Peña Nieto resolvió la situación a través de un acuerdo externo al Congreso: el Pacto por México, que fue un convenio entre dirigencias partidistas sobre los temas que se consideraron esenciales para sacar al país del estancamiento. El Pacto fue la gran apuesta de Peña Nieto, mediante la cual incorporó a los partidos opositores en el esperado éxito de su gestión; pero dejó fuera a la facción lopezobradorista, que desaprobó el acuerdo y abandonó el PRD.

Más allá de los acuerdos logrados a través del Pacto, el liderazgo de Peña Nieto con el tiempo perdió impulso. La expectativa priista de recuperar la hegemonía perdida y conservar la presidencia por muchos sexenios más, pronto se convirtió en una lucha por sobrevivir. Los escándalos de corrupción entre los gobernadores priistas estuvieron a la orden del día, tanto que en 2017 ya se contaban catorce ex mandatarios estatales presos o bajo investigación por malversación de fondos públicos.

Así, el sexenio de Peña Nieto transcurrió de la promesa de reconcentrar el poder y la autoridad, a un frágil equilibrio donde PRI, PAN y PRD luchaban por mantener posiciones. En ese contexto, por demás favorable a su causa, que López Obrador fundó en 2014 un nuevo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

2. Las elecciones de 2018

Durante las campañas presidenciales de 2018, el discurso de los tres principales competidores incluyó la necesidad de reorientar las transformaciones derivadas de la transición democrática. La pobreza, la desigualdad social, el clima de inseguridad pública y la corrupción fueron los temas que concentraron la atención de los candidatos Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribeña y Andrés Manuel López Obrador.

Los candidatos Anaya y Meade reconocieron que durante los gobiernos del PAN y el PRI, respectivamente, el problema de la violencia generada por el crimen organizado creció de la mano de la corrupción política, mientras el candidato López Obrador acusó a los gobiernos encabezados por ambos partidos, de beneficiarse con la corrupción, ser indiferentes a la pobreza y propiciar la desigualdad.

Además, el candidato morenista aprovechó el mote del “prianismo” para recordar que, durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, el PAN y el PRI negociaron para impulsar la agenda presidencial. A los dirigentes de ambos partidos, sus representantes y gobernantes, les llamó de manera genérica “la mafia del poder” y relacionó a esa hipotética agrupación con la corrupción política, el estancamiento económico y el mediocre crecimiento del país.

El discurso lopezobradorista presentó a su partido, Morena, como una alternativa a esa mafia del poder que secuestró la representación política para beneficiarse económicamente, mientras el país se estancaba y la violencia se multiplicaba.

En ese contexto político, el clima de las campañas fue complicado para los candidatos Anaya y Meade. Los gobiernos posteriores a la transición, del PAN y el PRI consiguieron estabilidad económica, consolidación del federalismo y un moderado fortalecimiento del Estado de derecho, además de contener el crecimiento de la pobreza extrema y convertir al país en potencia exportadora. Pero la economía no fue un tema central de las campañas. Al poner la corrupción, la inseguridad, la violencia y la desigualdad en el centro de la discusión, López Obrador impuso la agenda temática de las campañas.

Sin embargo, no todo el empuje de López Obrador durante las campañas se debió a su habilidad. Tanto Acción Nacional como el tricolor acudieron a la competencia presidencial de 2018 internamente débiles y fracturados.

Ricardo Anaya fue postulado por una insólita coalición de partidos tradicionalmente vinculados a la derecha (el PAN) y la izquierda (el PRD), y consiguió la candidatura luego de aprovechar su posición como dirigente nacional panista y dejar fisuras tan intensas que provocaron una diáspora de líderes y militantes distinguidos. Anaya enfrentó por igual la inconformidad de panistas y perredistas, por los acuerdos cupulares que hicieron posible la coalición, así como por el proceso que llevó a su postulación a la presidencia.

Por su parte, José Antonio Meade fue el candidato postulado por el PRI sin ser un militante tricolor, conforme al camino que le allanó la XXI Asamblea Nacional priista. Con una sólida preparación profesional y amplia experiencia en la administración pública, Meade tuvo en su contra, por lo menos, el desgaste del sexenio peñista, el desprestigio del priismo y los escándalos de sus gobernadores.

No fue sencillo conciliar la imagen de ciudadano independiente con una candidatura partidista. En sus reuniones con gobernadores, legisladores y otros líderes del partido afirmaba una fidelidad que contrastaba con la distancia que intentaba mostrar en actos con empresarios, estudiantes y personas ajenas al tricolor.

Tampoco fue fácil prometer el combate a la corrupción, mientras una docena de ex-gobernadores priistas enfrentaban cargos por ese motivo; o proponer políticas en materia de seguridad sin que implicaran críticas al desempeño de Peña Nieto.

A pesar de que tanto Anaya como Meade se esforzaron por mostrar ante el público sus cualidades y competencias, no lograron posicionarse como alternativas frente a AMLO, ni lograron desmarcarse de lo que López Obrador señaló como el origen de todos los males: la corrupción de un régimen neoliberal dirigido por la “mafia del poder”.

La promesa de cambio y la condena a la rapacidad neoliberal dieron sus frutos. En la elección del 1 de julio hubo un solo ganador: López Obrador, que atrajo para sí el voto de más de la mitad del electorado (53%) con 30.1 millones de votos.

El Partido Acción Nacional conservó la segunda posición a nivel nacional en alianza con el Partido de la Revolución Democrática; sin embargo, con 12.6 millones de sufragios, esta coalición consiguió apenas 23 por ciento de los votos, lo que la dejó a 30 puntos de distancia de la alianza lopezobradorista.

Más lejos todavía quedó el PRI, con 9.2 millones de votos equivalentes a 16.4 por ciento de las preferencias. No fue la primera vez que el PRI cayó al tercer lugar, pues en los comicios presidenciales de 2006 el candidato tricolor, Roberto Madrazo Pintado quedó en tercer lugar, detrás de López Obrador y del vencedor Felipe Calderón Hinojosa. Pero entonces el PRI consiguió una presencia relevante en el Congreso y los gobiernos estatales, que lo colocó como un aliado indispensable para el gobierno calderonista. En cambio, en 2018 la debacle priista fue total.

Esa elección modificó también la distribución del poder político a escala nacional y regional. En 30 de las 32 entidades federativas que integran la geografía del país se realizó por lo menos un tipo de elección local y Morena se erigió como vencedor en la mayoría de ellas. La presencia regional que el PRI mantuvo hasta en sus peores años, finalmente abandonó al tricolor.

Acción Nacional conservó su presencia en bastiones como Puebla, Guanajuato y Yucatán; mientras que Morena ganó cuatro gobiernos locales, la Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Veracruz. El PRI no ganó ninguna de las 9 gubernaturas que se disputaron el 1 de julio.

3. El *carro completo* de López Obrador

La victoria de López Obrador no sorprendió, después de ser puntero en las encuestas desde el comienzo de las campañas, pero sí causó asombro la contundencia del éxito de su partido. El 1 de julio de 2018, además del Presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores, la ciudadanía mexicana eligió 9 gobiernos locales, 972 diputados locales (585 de mayoría relativa y 387 de representación proporcional), 1,596 ayuntamientos, 24 juntas municipales (en Campeche), 16 alcaldías y 160 concejales (en la Ciudad de México); además de la elección extraordinaria de 3 ayuntamientos en Veracruz.

De tal manera, el primer domingo de julio concurren 629 elecciones a nivel federal y 2,777 a nivel local; 3,406 comicios en una sola jornada electoral.

Las elecciones locales, legislativas y municipales potenciaron el impacto de la elección presidencial de 2018. Cuando los legisladores decidieron empatar los calendarios electorales de las entidades con el federal, se difundió la narrativa de que buscaban simplificar la organización de elecciones y reducir costos. El efecto económico no se ha visto, pero el político sí.

Al empatar los comicios nacionales y locales se optó por un cambio drástico en la distribución del poder que en el caso específico de la elección de 2018 fue potenciado por un efecto de arrastre que benefició al Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y su candidato ganador.

Andrés Manuel López Obrador y la coalición que lo postuló (“Juntos haremos historia”, integrada por Morena-PT-PES), consiguieron la presidencia de la República, además de imponerse en 210 de 300 distritos electorales de la elección de diputados federales, así como en 23 de las 32 entidades federativas en la elección de senadores.

Como resultado, el tabasqueño encabeza el primer gobierno unificado en México desde hace más de dos décadas. La coalición lopezobradorista obtuvo 43 por ciento de los votos en ambas cámaras del Congreso, que le reportan 308 curules, de las cuales 258 pertenecen a Morena, 28 al PT y 28 al PES; además de 69 senadores: 58 senadores son de Morena, 6 del PT y 5 del PES.

Es necesario explicar así sea someramente cómo el 43 por ciento de la votación ciudadana se transformó en más de 51 por ciento de los asientos en ambas cámaras. Si bien la coalición “Juntos haremos historia” triunfó en 4 de cada 10 distritos de mayoría y en dos tercios de las entidades federativas, los topes legales (8%) que buscan impedir la sobrerrepresentación fueron burlados, mediante una creativa distribución de candidaturas entre el PT y el PES.

De tal manera, cuando Morena llegó al tope de representación en cada una de las cámaras, los otros dos partidos recibieron legisladores que, una vez designados, se incorporaron a la bancada del partido con más peso (Morena). Así, las 61 curules de mayoría que obtuvo el PT se convirtieron en 28 y las 56 que logró el PES se redujeron a 28.

Con la sobrerrepresentación de Morena sus oponentes quedaron subrepresentados en el Congreso. En la Cámara de Diputados, la coalición PRI-PVEM-NA consiguió 23.8% de votos y solamente obtuvo 12.6% de los asientos; en tanto que la coalición PAN-PRD-MC logró 27.6% de votos que se tradujeron en 25.8% de curules.

De tal manera, la mayoría legislativa de López Obrador le debe tanto al arrastre electoral del tabasqueño como a la lealtad de los partidos que formaron parte de su coalición.

Es verdad que López Obrador consiguió la preferencia en todas las entidades federativas excepto una, pero también es cierto que Morena perdió 4 de las 9 elecciones para renovar gobiernos locales; además, 6 entidades federativas; Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Yucatán votaron de manera claramente diferenciada a López Obrador y los demás candidatos de su coalición; mientras que Guanajuato se mantuvo refractario a la ola lopezobradorista.

En Guanajuato la votación por Ricardo Anaya fue mayor, pero de los estados donde ganó López Obrador, en Querétaro, Aguascalientes y Jalisco, la diferencia de votos entre él y el candidato panista fue menor a 10 por ciento. En esas entidades, además de Tamaulipas, la coalición PAN-PRD se impuso en las elecciones de senadores y diputados. En Yucatán los electores votaron por el PRI y en Nuevo León por Movimiento Ciudadano en las elecciones de diputados y senadores, pese a que apoyaron a Morena en la elección presidencial.

Los casos más singulares de votación diferenciada se dieron en Jalisco, Puebla y Yucatán; ahí la ciudadanía votó mayoritariamente por López Obrador pero favorecieron a los candidatos a gobernador de la coalición PAN-PRD.

De tal manera, la victoria lopezobradorista se explica por el hastío que generó el gobierno de Peña Nieto y López Obrador supo capitalizar a favor de su movimiento. El desencanto con el retorno del PRI le dio al tricolor el peor resultado electoral de su historia, y eso favoreció al tabasqueño y su partido, Morena, que se impuso en distritos, municipios y estados tradicionalmente priistas.

Pero el triunfo de Morena también se explica por una exitosa estrategia de distribución de candidaturas entre los partidos de su coalición (Morena, PT, PES), además

de un éxodo de perredistas (el partido en el que militó el tabasqueño durante 25 años, además de dirigirlo y ser su candidato presidencial en 2006 y 2012).

De la misma forma que hay un grupo de estados menos receptivos a la propuesta política de López Obrador y su partido, también existe un conjunto de entidades federativas en donde la penetración del lopezobradorismo es mayor. Ahí es donde la elevada preferencia por Morena puede facilitar las condiciones para que el partido se consolide regionalmente.

En Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo, Morelos, Oaxaca, Nayarit, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Baja California Sur, el tabasqueño obtuvo más del 60 por ciento de la votación total, además de arrasarse en las elecciones por los congresos locales y ayuntamientos.

Destacan dos casos: en Tabasco ocho de cada diez electores apoyaron a su paisano, mientras que siete de cada diez tlaxcaltecas votaron a favor de López Obrador. Ambas entidades ya habían sido gobernadas por personas afines al tabasqueño, cuando formaba parte del PRD, por lo que no sorprendería que en el futuro se conviertan en bastiones de Morena.

La región sur del Golfo de México y el sureste de la república pueden considerarse un corredor morenista, por el desempeño de ese partido en 2018, pero también por la previa penetración de los partidos afines a López Obrador.

Tampoco en el noroeste del país la presencia del lopezobradorismo es un fenómeno inusual: Baja California Sur y Sinaloa le dieron triunfos al PRD cuando López Obrador pertenecía a ese partido.

Identificar los bastiones, reales o potenciales de cada partido político permite una apreciación más clara de la victoria de López Obrador en 2018. El débito de Morena hacia sus compañeros de coalición (PT y PES) arroja un primer matiz sobre la presencia nacional del partido del presidente. El segundo matiz se encuentra en lo que los opositores del lopezobradorismo conservan y, especialmente, en lo que le arrebataron el 1 de julio.

4. Los nuevos (des)equilibrios partidistas

No cabe duda que la geografía política de México se transformó de manera profunda después de la elección de 2018. Ante el estancamiento electoral del PAN y el retroceso del PRI y el PRD, Morena irrumpió como una opción altamente competitiva, que ganó la Presidencia fortalecida por su mayoría en el Congreso federal y una sólida presencia en las entidades federativas (es gobierno en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Tabasco, y Veracruz, además de tener a su aliado, el Partido Encuentro Social al frente del gobierno de Morelos).

La situación para los rivales de Morena es crítica. En términos territoriales, Acción Nacional todavía cuenta con algunas gubernaturas.

Sin embargo, fuera de esta región la presencia nacional del blanquiazul parece disminuir cada año. En 2014 la depuración de su padrón de militantes arrojó poco más de 270 mil registros; esto dejó al partido cerca de perder el registro, aunque las campañas de afiliación dieron frutos y para 2017 ya reportaba más de 378 mil militantes empadronados; todavía muy lejos de los 6.3 millones de priistas y los 5.2 millones de perredistas que se acreditaron y comprobaron el mismo año.

Acción Nacional nunca fue un partido de masas. Su prioridad estuvo siempre en la formación de cuadros políticos disciplinados, capacitados y activos, así que es precisamente ahí donde se nota más la crisis que el partido atraviesa por lo menos desde que perdió la presidencia en 2012.

La diáspora lenta y sostenida de militantes destacados, entre ellos ex gobernadores y sus dos ex presidentes, es reflejo de conflictos y disputas internas que no se resuelven, e impiden que se desempeñe como un partido de oposición eficaz y un auténtico contrapeso al poder lopezobradorista.

Por su parte, el PRD se halla inmerso en su propia crisis, luego de perder bastiones tan importantes como la Ciudad de México, Tabasco y Morelos, conserva únicamente el gobierno de Michoacán.

La derrota más emblemática del perredismo fue en la Ciudad de México, que conquistó en 1997 y donde los gobiernos del propio López Obrador y de Marcelo Ebrard, colocaron al partido en una posición prácticamente hegemónica.

Sin embargo, las derrotas no son nuevas. En 2015 el PRD ganó únicamente cinco de las 14 delegaciones que gobernaba y en la elección de 2018 las perdió todas, mientras Morena consiguió once, el PAN cuatro y el PRI una.

Al igual que en el blanquiazul, la crisis perredista es mucho más que la pérdida de territorios, puestos de representación y cargos públicos para repartir. El sol azteca tiene sus propias luchas intestinas que se expresan en el éxodo constante de militantes, líderes regionales y representantes populares hacia Morena.

Las cosas no son mejores para el PRI, aunque todavía es gobierno en 12 estados y en cinco de ellos nunca ha perdido: Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo y Estado de México. Aunque sus posesiones no son menores, quedaron atrás los tiempos en los que el tricolor gobernaba la mayoría de las entidades federativas y los congresos locales, además de conservar la primera posición en el Congreso federal.

El PRI fue un interlocutor indispensable para los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que enfrentaron escenarios de gobierno dividido. Además, el tricolor fue el candidato a vencer en la gran mayoría de comicios locales, hasta que llegó el 2018, y la coalición lopezobradorista se impuso.

El partido que en 2012 prometió que recuperaría la posición hegemónica que gozó durante la mayor parte del siglo XX, salió de la presidencia con el desprestigio de varios exgobernadores sujetos a investigación por corrupción, un presidente que no cumplió la promesa de revivir el milagro mexicano y una ciudadanía que recuperó la memoria para sacar al tricolor del poder, prácticamente por las mismas razones que lo sacó en la elección del 2000.

El tricolor padece una grave crisis organizativa de cara a la renovación de su dirigencia nacional además. Habrá que ver si sus estructuras territoriales y sectoriales continúan funcionando después de que la peor administración priista dejó al partido totalmente mermado.

Además de los cargos de representación y gobierno, las posiciones territoriales y la estabilidad organizativa, otra expresión de la distribución del poder es la cantidad de recursos económicos que cada partido tiene a su disposición.

El financiamiento que por ley se otorga a cada partido político corresponde a la votación obtenida en la última elección. El financiamiento se traduce en capacidad organizativa, estabilidad financiera, capacidad para sostener estructuras territoriales, formación y capacitación política de sus cuadros y bases; además de capacidad competitiva.

Cuando Morena obtuvo su registro, en 2014, su financiamiento anual fue de \$33 millones, 185 mil 595 pesos. Para 2018 ese financiamiento alcanzó la cifra de 634 millones, 819 mil, 89 pesos. En 2019 el financiamiento público federal para Morena es de 1,604 millones, 723 mil 774 pesos.

Por supuesto, la ganancia de unos es la pérdida de otros. En 2014 el financiamiento del PAN fue de 894 millones, 933 mil 237 pesos; que en el año electoral de 2018 alcanzó 1,266 millones, 716 mil 285 pesos; y para 2019 disminuye a 887 millones, 240 mil, 14 pesos.

Para el PRI, que en 2014 tuvo recursos por 1,065 millones, 507 mil, 58 pesos; y en 2018 alcanzó la cifra de 1,675 millones, 191 mil, 912 pesos; en 2019 su financiamiento cae a 835 millones, 762 mil, 670 pesos.

El más afectado es el PRD, que en 2014 recibió 682 millones, 236 mil 672 pesos; que para la elección de 2018 aumentaron hasta 759 millones, 185 mil, 520 pesos; pero en 2019 su financiamiento cae hasta 408 millones, 897 mil 584 pesos.

A grandes rasgos, el financiamiento público para Morena será casi equivalente al del PAN y el PRI juntos y más de cuatro veces el financiamiento del partido que le dio origen, el PRD.

El financiamiento de Morena le provee de una base financiera valiosa para consolidarse como una alternativa de mediano plazo, más allá de la coyuntura de 2018.

Al mismo tiempo, la reducción del financiamiento a los partidos que experimentan problemas, sólo puede agudizar sus crisis internas, pues reduce el margen de operación de los líderes, impacta en las estructuras territoriales y reduce la competitividad. Con mucho

menos recursos, el PAN, el PRI y el PRD tienen más difícil superar los escenarios de crisis que experimentan.

5. El temor de un poder absoluto

El tema de la hegemonía es fundamental y frecuente en el estudio de los sistemas político y de partidos en México. La hegemonía que trató de restaurar el gobierno de Enrique Peña Nieto fue aquella en donde el presidente domina a los otros poderes y carece de los contrapesos necesarios para evitar el ejercicio arbitrario del poder.

Este no es un problema endémico de la clase política mexicana. La tentación de ejercer un gobierno sin contrapesos es tan común en las democracias, como la narrativa, según la cual, la oposición, los controles y los contrapesos son obstáculos para un ejercicio eficiente del poder político.

Peña Nieto intentó reimplantar el partido hegemónico a costa de los órganos autónomos, los contrapesos y los controles institucionales, pero lo único que consiguió fue una corrupción desbordada. Cuando el mexiquense ganó la presidencia, en 2012, los líderes de su partido se apresuraron a prometer la restauración de la hegemonía, apuntalada por lo que anticipaban, sería una gestión exitosa de los asuntos públicos. La realidad los rebasó y la promesa de restaurar la hegemonía priista chocó con los escándalos de corrupción y la incapacidad para frenar la inseguridad.

Pero el fantasma de la hegemonía sigue presente. Los críticos del lopezobradorismo advierten la debilidad de todos los partidos de oposición, mientras el presidente aprovecha su mayoría en el Congreso para impulsar su agenda e imponer su estilo de gobierno. Los partidos de oposición cuentan con suficientes posiciones para ejercer contrapesos efectivos a escala nacional y regional; pero sus crisis internas les impiden actuar con la eficacia necesaria.

Ciertamente resulta preocupante el retorno de un partido hegemónico, que revierta lo construido durante la transición democrática y genere condiciones para implantar un régimen autoritario, derivado no de los equilibrios de las fuerzas políticas, sino de las

características de sus integrantes. El déficit cívico es un factor común en la política mexicana.

La rampante corrupción es un evidente signo de alerta, pero no es el único. En el ejercicio presidencial de Peña Nieto y López Obrador se notan coincidencias que apuntan a una añoranza de los tiempos previos a la transición. El Pacto por México, un acuerdo cupular, externo a las dinámicas legislativas e institucionales, fue un rasgo de Peña Nieto que López Obrador replica a través de consultas a modo y el empleo de su mayoría legislativa.

Además, al mexiquense, como al tabasqueño, les incomodan las opiniones adversas; frente a la divulgación de información incómoda o negativa sobre su gobierno, en ambos se percibe un deseo de controlar la prensa y la información.

Pero el rasgo más importante es el diagnóstico de que lo que el país necesita para salir adelante es una presidencia fuerte, sin estorbosos controles, ni contrapesos que se interpongan entre la voluntad presidencial y su ejecución. Sería anecdótico, si tales rasgos no fueran distintivos de gran parte de quienes respaldan las acciones presidenciales.

Reflexiones finales

La transición política de México se dio a través de un conjunto de reformas que, entre 1977 y 1996 establecieron condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los mexicanos, generaron un entorno partidista plural, crearon reglas e instituciones para contar con elecciones libres y confiables, además de crear un conjunto de organismos autónomos encargado de cuidar la preservación de los derechos obtenidos durante la misma transición y fungir como salvaguardas de los ciudadanos frente a las instituciones desde las cuales se ejerce el poder político (ejecutivo, legislativo y judicial).

La alternancia política fue el punto culminante de la transición, a través de la cual quedó demostrado el tránsito del sistema de partido hegemónico a un régimen plural, con elecciones competitivas, equilibrio de poderes y un federalismo fortalecido.

Las reformas posteriores a la alternancia obedecieron a una lógica diferente. Con ellas no se pretendió establecer condiciones de competitividad democrática, sino evitar que

los competidores de los procesos electorales cometieran acciones que alteraran la equidad de la competencia.

La reforma electoral de 2014 profundizó más en la vigilancia sobre el comportamiento de los partidos. Hay, por lo menos, un reconocimiento tácito, de que el problema no se encuentra en las reglas de la competencia electoral sino en la conducta de los partidos y los candidatos. Con esta perspectiva se fortalecieron las facultades del INE para fiscalizar los recursos de los partidos, además de administrarlos en periodo de campaña, cuando estas organizaciones así lo soliciten.

Así las cosas, las reformas posteriores a la transición han dejado pasar aspectos sustantivos de la democracia, sin los cuales la calidad de esta forma de organización política es limitada. La rendición de cuentas es el principal tema pendiente, pues a pesar de que existe una institución encargada de vigilar el uso de los recursos públicos (la SFP) y se han creado contralorías encargadas de vigilar el presupuesto que se ejerce en las dependencias de los poderes ejecutivo y legislativo, los mecanismos de quejas, denuncias e investigación todavía son incipientes.

Los retos de la democracia mexicana se encuentran en las áreas indispensables para construir una democracia de calidad y, de manera prioritaria, en la creación de mecanismos para la rendición de cuentas. Establecer esos mecanismos es un desafío mayor, pues se trata de generar reglas y medios para vigilar a los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, en todas las instituciones públicas. Ante esta necesidad, se impone la realidad de una clase política que añora los tiempos del poder concentrado y libre de contrapesos.

El equilibrio del poder después de la elección de 2018 parece claramente favorable a Morena y su presunta aspiración de restaurar el régimen de partido hegemónico. Sin embargo, los equilibrios y repartos de poder que resultaron de esa elección no son permanentes cuando se revisan a la luz de los bastiones regionales, los recursos económicos, tal vez, la capacidad organizativa de los partidos, pero sobre todo de una ciudadanía cuyo papel será definitivo en la construcción de un mejor futuro.

Fuentes Consultadas

- ACKERMAN, John (2006) "Democratización, pasado, presente y futuro" en Perfiles Latinoamericanos, julio-diciembre de 2006, pp. 157 sitio Web: <http://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/viewFile/217/171>
- ACKERMAN, J. (2010). "Organismos autónomos y la nueva división de poderes en América Latina"; en *Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa*. México: UNAM-III-FD.
- AGUILAR Rivera, José Antonio (2014) Grandes expectativas: la democracia mexicana y sus descontentos en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* Volumen 59, número 222, septiembre-diciembre de 2014, pp 19–50
- CANSINO, César. (2005): "Entre la democracia real y la democracia ideal. Consideraciones críticas" en *Metapolítica*. N° 39. Vol. 8. Enero – Febrero. México: Cepcom. Pp. 99-108.
- CARPIZO McGregor, Jorge (1979) *El presidencialismo mexicano*. México, DF, Siglo XXI Editores.
- CRESPO, José Antonio (2012) "Elecciones y transición democrática en México (1976-2012)" en *Estudios* número 103; Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sitio Web: <http://biblioteca.itam.mx/estudios/100-110/103/JoseAntonioCrespoEleccionesytransiciondemocraticaenmexico1976-2012.pdf>
- El Universal*, Redacción (2016) "Corrupción derrotó al PRI: WSJ", (junio 7, 2016). *El Universal*. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06/7/corrupcion-derroto-al-pri-wsj>
- GARRIDO, Jorge Javier (1982) *El partido de la revolución institucionalizada (Medio siglo de poder político en México)*; Editorial Siglo XXI, México.
- GONZÁLEZ Casanova, Pablo (1965) *La democracia en México*; Editorial Era, México.

- LOGHNI, Isabel (julio 4, 2011) “El PRI arrasa en las elecciones y augura ya su regreso al poder”. El Mundo.es Recuperado de: <http://www.elmundo.es/america/2011/07/04/mexico/1309746907.html>
- MÁRQUEZ, Daniel (2014) “Democracia y partidocracia en México: la decepción democrática” en *Revista de Derecho Estasiológico. Ideología y Militancia* Número 3 Enero-Junio México, DF, FES-Aragón pp 37-64,
- MEYER, Lorenzo (2016) *Distopía mexicana: Perspectivas para una nueva transición*, Random House.
- MUNCK, Gerardo (2004), “La política democrática en América Latina: contribuciones de una perspectiva institucional”, *Política y Gobierno*, XI http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4754375&pid=S1665-2037201100020000300031&lng=es
- PESCHARD, Jacqueline (2013) “Transición democrática, conflictividad electoral y la herida de la desconfianza”, en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LVIII, núm. 218, mayo-agosto de 2013. Sitio Web: <https://www.redalyc.org/html/421/42128962013/>
- PRZEWORSKI, Adam (2010) *La democracia y sus límites Una memoria personal* en *Nexos*, marzo 1 de 2010
- RABOTNIKOF, Nora (2009) *De la democracia desencantada al desencanto democrático*. Serie Conferencias Magistrales, Instituto Nacional Electoral. Disponible en <https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-MaterialesLectura/docs/CONFERENCIA-20-NORA-RABOTNIKOF.pdf>
- SARTORI, Giovanni (1980) *Partidos y sistemas de partidos*, Alianza, Madrid.
- WOLDENBERG, José (2012) *Historia mínima de la transición democrática en México*; México, el Colegio de México.